

PSOE

- **DECLARACIÓN POLÍTICA
CONSEJO TERRITORIAL**

12-05-2012

DECLARACION DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL PSOE

(12 de mayo, 2012)

El Consejo Territorial del PSOE se celebra en un momento especialmente difícil para nuestro país. Una crisis económica prolongada y de una intensidad nunca vista, unida a la percepción de que la salida no está cercana, ha generado un estado de gran incertidumbre en los ciudadanos, muchos de los cuales miran el futuro con creciente angustia. Entre ellos, los jóvenes, que sufren de manera aún más intensa la ausencia de expectativas, y contemplan con temor el momento de su acceso al mercado laboral.

Lejos de generar confianza, la gestión del Gobierno del Partido Popular en estos meses no ha hecho sino agravar la preocupación de una ciudadanía que, por vez primera en las últimas tres décadas, ve amenazados los elementos esenciales de nuestro modelo social.

A menos de cinco meses de su llegada al Gobierno de la Nación, es ya evidente que la derecha carece, al contrario de lo que presumía, de un plan para responder a la crisis económica que azota a Europa, y cuyo efecto más importante es nuestro país es un elevado incremento del desempleo. En tan corto espacio de tiempo, las improvisaciones y permanentes contradicciones del Gobierno se han visto acompañadas de una alarmante falta de liderazgo para dirigir políticas eficaces y trasladar confianza a la ciudadanía; una ciudadanía que asiste con signos de preocupación, e incluso de angustia, al deterioro de la situación económica.

Desde que gobierna el PP, lejos de decrecer, el número de desempleados se ha incrementado en 365.000. Ante esta evidencia, el Gobierno parece haber tirado la toalla, como lo demuestra que las previsiones del Plan de Estabilidad incluyen para el 2015 una tasa de desempleo superior a la del 2011, es decir, mayor que el que se encontraron. Al tiempo, en contra de sus vaticinios cuando estaba en la oposición, Rajoy no ha contribuido a mejorar la confianza en la economía española, que se ha desmoronado. Así lo demuestra el hecho de que el diferencial de la deuda española se mantiene desde hace tiempo por encima del umbral de los 400 puntos, ante la resignación del Ejecutivo. Por

último la caída de los ingresos, que se quiere compensar con subidas impositivas, hace ya difícilmente realizable el objetivo del déficit previsto para el presente año, como acaban de poner de manifiesto las propias previsiones de la Unión Europea.

A esta situación, en la última semana se le ha sumado la lamentable gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis de Bankia. Cinco días han hecho falta para que, en un asunto de capital importancia que afecta al cuarto banco de España, un representante del Gobierno compareciera ante la sociedad y diera alguna explicación.

El Gobierno tiene que entender el rechazo que en los ciudadanos produce que el anuncio de las ayudas a una institución financiera coincida en el tiempo con recortes que afectan a servicios básicos como la educación y la sanidad. Por ello, es necesario que el Gobierno dialogue con el Partido Socialista sobre la reforma financiera y las medidas que afectan a la sanidad y la educación. En todo caso, es imperativo que se garantice que, terminado el proceso, ni un solo euro de los contribuyentes se haya perdido. Que las medidas que se lleven a cabo para sanear la entidad tenga en cuenta los intereses de los ahorradores, de los titulares de hipotecas, de los pequeños empresarios, de los autónomos, y de los ciudadanos que suscribieron acciones preferentes y pueden sentirse engañados. Igualmente, los socialistas exigiremos que el proceso se desarrolle con plena transparencia y que en él se exijan las responsabilidades a que hubiera lugar.

Si algo ha quedado claro en estos meses de gobierno de Rajoy es que la derecha no dispone de un plan, pero si cuenta con una ideología extremadamente conservadora que se vale de la crisis como cortada para llevar a cabo una ofensiva en toda regla contra el Estado de Bienestar y el mantenimiento de los derechos sociales y de ciudadanía. Porque lo que se está produciendo en España, lejos de la representar la única respuesta posible a la crisis económica, constituye un auténtico ajuste de cuentas contra el Estado de Bienestar por parte de una derecha que nunca lo ha acabado de asumir.

La reforma laboral ha quebrado un modelo de relaciones laborales, basado en la negociación y el diálogo, que se ha mostrado eficaz para el progreso de la

economía española. Por otra parte, al abaratar el despido en un momento de contracción económica, no ha hecho más que contribuir al incremento del desempleo, como ya se está viendo, y a la precarización de las condiciones de los trabajadores.

Además de ineficaz el ajuste es profundamente injusto en el plano social, ya que los recortes en sanidad y educación, y los abusivos incrementos de tarifas e impuestos recaen de manera especial sobre las clases medias trabajadoras y los más débiles; sectores que ven como día a día su situación empeora y su protección se debilita, al tiempo que el Gobierno amnistía a los defraudadores. Además, pone de evidencia una gran farsa, un engaño sin precedentes: el de un gobierno que, pocos meses de las elecciones, hace exactamente lo contrario de lo que se comprometió a hacer.

El Consejo Territorial ha concluido que, contra lo que proclama la derecha, es necesaria, y posible, otra política para sacar al país de la crisis y preparar la recuperación económica. Una política que es viable y que, como hemos demostrado con la alternativa presentada a los Presupuestos Generales del Estado, mantiene los objetivos de austeridad y estabilidad presupuestaria necesarios en un contexto de recesión y de presión sobre las deudas; una política que equilibra los costes y que no deteriora los niveles de protección social, no encarece el acceso a los servicios públicos ni expulsa a miles de ciudadanos de su cobertura. Una alternativa que reduce el déficit sin lesionar la educación y la sanidad, que recupera la inversión en I+D+i y que, en definitiva, ha sido capaz de combinar ajuste con políticas de crecimiento.

Las Comunidades Autónomas están viviendo en primera línea la virulencia de la política del Gobierno hacia el Estado de Bienestar, en muchas ocasiones sin reparar en sus competencias. En sanidad, se ha puesto en marcha un auténtico cambio de modelo que liquida la cobertura universal para establecer el viejo aseguramiento, y que hace del copago de los pensionistas y de los recortes en las prestaciones la receta para afrontar las dificultades de financiación de la sanidad pública. No menos graves pueden ser las consecuencias de la batería de medidas anunciadas en el ámbito educativo. El recorte de la financiación pública en todos los niveles educativos, con fuertes

subidas de tasas universitarias y la amenaza de expulsión de miles de profesores, va a deteriorar la calidad de la enseñanza y va a afectar de lleno a la igualdad de oportunidades de los alumnos. Además, los continuos anuncios de reformas que no se acaban concretando están generando una enorme confusión en nuestro sistema educativo.

El Consejo Territorial ha examinado con preocupación el impacto de la política del Gobierno en sanidad y educación, y la absoluta falta de dialogo hacia las Comunidades y Ayuntamientos con la que se está abordando reformas que afectan a la línea de flotación del Estado de Bienestar.

Demandamos al Presidente del Gobierno que convoque con carácter inmediato la Conferencia de Presidentes con una agenda que incorpore prioritariamente las reformas y recortes educativos y sanitarios porque no es posible abordar capítulos tan sensibles para la cohesión social y territorial sin voluntad de acuerdo, tan sólo desde la imposición.

En España la mayor parte de los ingresos los recauda el Estado vía impuestos, y son las Comunidades Autónomas las que deben hacer frente a la prestación de servicios básicos. Por ello, es prioritario que ambas instancias, Estado y Comunidades Autónomas, alcancen un acuerdo general sobre las líneas básicas de estos servicios, sobre qué sanidad y que educación queremos los españoles.

Desde los Gobiernos autonómicos es posible llevar a cabo otras políticas que mantengan la cobertura universal y las prestaciones sanitarias, y la calidad educativa y que, al tiempo, adopten medidas de ahorro en la gestión, de aumento de los ingresos y de racionalización del gasto, y ello porque compartimos el objetivo de la austeridad, aunque discrepamos de los plazos para alcanzarlo y del modo profundamente injusto en que se nos está imponiendo por parte del Gobierno.

Los socialistas vamos a cumplir la Ley allí donde gobernamos, pero estamos decididos a agotar todas las posibilidades que la Ley permita para que su aplicación no lesione los intereses de los ciudadanos.

Existen márgenes para la austeridad sin, por ello, encarecer el acceso a servicios públicos esenciales o recortar prestaciones. Los socialistas estamos comprometidos con la estabilidad presupuestaria, y creemos que es posible mantenerla sin dañar el Estado de Bienestar.

Por otra parte, los Gobiernos autonómicos y locales socialistas incorporarán una política orientada a estimular el crecimiento y a favorecer la creación de empleo mediante la adopción de iniciativas que revitalicen la demanda y los incentivos para la inversión pública y privada.

Desde algunos ámbitos se está promoviendo una campaña de desprestigio del modelo territorial español, al que se quiere identificar como causa de algunos de los males que aquejan a nuestra economía. Esta campaña, a la que no es ajena ni el Gobierno de España ni algunos dirigentes del PP, bajo la excusa de evitar duplicidades, suprimir gastos superfluos, aplicar criterios de austeridad y cumplir con los objetivos de déficit, está cuestionando el modelo territorial que nos dimos en la Constitución del 1978, y que ha ido evolucionando y perfeccionándose a lo largo de más de tres décadas de democracia.

Si queremos evitar que estas actitudes provoquen un clima de desafección e incertidumbre ciudadana hacia un modelo de éxito que nos ha llevado a disfrutar de las mayores cotas de bienestar de la historia, debemos abordar el debate sobre la mejora y modernización del sistema territorial, desde el rigor y la seriedad que merece una cuestión de esta trascendencia.

El Consejo Territorial del PSOE insta al Gobierno a que no modifique unilateralmente el diseño competencial del que nos hemos dotado, y reitera nuestra disposición a abordar un diálogo sobre las reformas necesarias en nuestro modelo territorial con el fin de perfeccionarlo, modernizarlo y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. El PSOE considera que el modelo territorial de España y las competencias y financiación de las distintas administraciones son cuestiones trascendentales para el futuro de nuestro país, y por ello queremos afrontar su debate con transparencia, claridad y sobre bases sólidas. Por ello instamos al Gobierno de España a que concrete sus propuestas y aporte los estudios económicos y administrativos en los que basa las mismas.

La crisis económica no puede ser la excusa para llevar a cabo un ataque contra los Ayuntamientos que desempeñan una labor imprescindible en la provisión de servicios a los ciudadanos, y que hoy se ven amenazados por la falta de seriedad del Gobierno y el PP para abordar un debate que consideramos necesario. Estamos dispuestos a emprender cambios y reformas en el ámbito local que fortalezcan los derechos y los servicios y, para ello, el principio de autonomía local es irrenunciable.

El Consejo Territorial también ha abordado la situación de Europa, sujeta en estos momentos a cambios de un profundo calado que, a su vez, van a modificar de manera inminente las condiciones y el contenido de las respuestas de las instituciones europeas y nacionales a la crisis económica global. El triunfo de Françoise Hollande y el Partido Socialista en las elecciones a la Presidencia de la República en Francia, tendrá un alcance mayor al de cualquiera de los estrictos cambios de mayorías políticas en buena parte de los países de la Unión, que se han producido en los dos últimos años como resultado de los impactos políticos de la crisis. Debe constituir el arranque de un cambio de ciclo en las políticas una vez se ha podido constatar que sólo con ajustes no se avanza hacia la superación de la crisis y la recuperación económica.

En los mismos términos que el PSOE ha defendido en la pasada campaña electoral y en la oposición al Gobierno del PP en estos meses, hoy en Europa ya se da por agotado el modelo de los ajustes como única receta ante la crisis, cuyos resultados positivos nunca han llegado, y se abre la puerta a compaginar el imprescindible mantenimiento de la austeridad presupuestaria con una política de crecimiento basada en inyectar recursos a los países, tal es el caso de España, que los necesitan como condición imprescindible para impulsar su recuperación.

El nuevo escenario político que se está configurando en la Unión Europea viene, por tanto, a desmentir el argumento, la ideología del ajuste duro como inexorable para afrontar la crisis que con tanta rotundidad ha venido defendiendo el Gobierno del PP; muy al contrario, abre la puerta a importantes cambios en la estrategia económica que han de incluir una mayor

flexibilización en el calendario de la consolidación fiscal marcado por la Comisión, tal como defendió y propuso el PSOE. Lamentablemente, el Gobierno del PP ha rechazado esta vía y se ha mantenido ausente del debate europeo sobre la nueva política de estímulos al crecimiento. De esta forma, uno de los países que pueden resultar beneficiados en mayor medida de un cambio sustantivo en la orientación de las políticas económicas de la Unión, tiene uno de los Gobiernos más ajenos a decisiones de cuya orientación depende que dejemos atrás la crisis.

Un nuevo panorama se dibuja en España y en el resto de Europa. Las recientes elecciones autonómicas en nuestro país, así como los últimos procesos electorales europeos, tanto de ámbito nacional como regional, muestran un cambio claro de tendencia, un avance de la socialdemocracia, y un retroceso de la derecha.

En este escenario, es imprescindible avanzar hacia una armonización de la política fiscal europea, porque ya es insostenible solo la suma de las políticas fiscales nacionales, y abordar una reforma del Banco Central Europeo que refuerce su condición de instrumento fiscal al servicio de la recuperación económica y que cuente con capacidad para apoyar a los países a superar sus dificultades; sus limitaciones se han hecho especialmente evidentes con oportunidad de la crisis de la deuda en la que la emisión de bonos europeos hubiesen ahorrado a nuestro país miles de millones en el pago de intereses.

Si el proceso de armonización de la política fiscal de los países de la Unión ha de llevar su tiempo, existen medidas que pueden ponerse en marcha de manera inmediata. Tal es el caso del Impuesto sobre Transacciones Europeas, que propugnamos los socialistas europeos y que ya ha recibido el apoyo tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión.

En todo caso, PSOE está decidido a impulsar desde las instituciones europeas, junto con el resto de partidos que configuran el PSE, políticas que combinen la austeridad con las medidas de estímulo al crecimiento.

Demandamos, por tanto, que el Gobierno del PP abandone su tibieza y se implique con determinación en el proceso de toma de decisiones en el seno de

la Unión Europea; decisiones que nos afectan muy directamente en tanto buena parte de nuestra capacidad para salir de la crisis y dar paso al crecimiento desbordan el ámbito nacional y se instalan en el territorio de la gobernanza europea.

Ante la grave situación que atraviesa nuestro país, en medio de una crisis económica sin precedentes que genera una gran incertidumbre entre los ciudadanos, los socialistas consideramos que España necesita actuaciones políticas decididas en cinco grandes ejes:

- **España necesita políticas de crecimiento** que, en el marco de la Unión Europea, se sumen a las medidas de austeridad, como única vía posible para superar la crisis.

Se hace tan indispensable como urgente una nueva estrategia económica, que surja de la concertación y que incorpore estímulos al crecimiento para impulsar la demanda interna y asegurar la salida de la recesión. Hay un consenso creciente en que el ajuste duro estrangula nuestras posibilidades de crecimiento. Por ello, es necesario acordar en la Unión Europea una ralentización en el ritmo de consolidación fiscal, que permita políticas más expansivas. Sólo así conseguiremos animar nuestra economía y abandonar el ciclo depresivo en el que nos hallamos instalados; y, sobre todo, lograremos atender al objetivo prioritario que tiene la sociedad española, que es crear empleo.

- **España necesita la garantía de los servicios públicos** que conforman nuestro Estado Social y constituyen una conquista irrenunciable para millones de ciudadanos. Asegurar su sostenibilidad es, por tanto, una exigencia ineludible.

El Estado de Bienestar es el cemento que ha asegurado la cohesión de la sociedad española en los últimos 30 años, y no puede convertirse en la víctima propiciatoria de la crisis. La recuperación no puede hacerse a costa de sacrificar el principio de igualdad de oportunidades, ni de aumentar la discriminación entre ciudadanos, ni de debilitar sus

derechos sociales. Para que la crisis no deteriore irremisiblemente la calidad de vida de los ciudadanos, los socialistas estamos convencidos de que estos derechos deben gozar de la máxima protección.

- **España necesita un sistema financiero sano y solvente** que cumpla con la misión que tiene encomendada: aportar la liquidez que nuestra economía necesita, los recursos para que las empresas prosperen y creen empleo.

Los procesos de reestructuración financiera, que son necesarios para asegurar el futuro del sistema, deben llevarse a cabo con transparencia y han de garantizar, en primer término, los intereses de los ciudadanos, que en ningún paso pueden verse perjudicados por el origen y desarrollo de esta crisis financiera. Esta exigencia conlleva también que los recursos, el dinero público que se ponga en los mismos sea recuperado por los poderes públicos.

- **España necesita consolidar la arquitectura institucional** que quedó plasmada en la Constitución, la de un Estado Autonómico cuyo buen funcionamiento se basa en la lealtad mutua entre las diferentes instancias de poder territorial. Las reformas que se emprendan estarán encaminadas a reforzar ese modelo, mejorando su eficacia y evitando cualquier rigidez o solapamiento.

En ese marco, los Ayuntamientos deben fortalecer su condición como pieza institucional de más proximidad con los ciudadanos, y por ello los procesos de reforma dirigidos a mejorar la prestación de servicios deberán llevarse a cabo preservando la autonomía local.

- **Y España necesita que las instituciones y organismos del Estado desarrollen su actividad siempre desde el diálogo y buscando el máximo entendimiento** para evitar la paralización de su funcionamiento.

La democracia exige instituciones que cumplan con normalidad sus cometidos, que sean neutrales en su funcionamiento, y que hagan del respeto al pluralismo el criterio esencial de su comportamiento. Para ello, es indispensable la voluntad política de consenso en la elección de los miembros de esas instituciones, así como la disposición para respetar la plena independencia en el desarrollo de sus tareas.

Sobre estos cinco ejes, sobre estas cinco prioridades los socialistas vamos a orientar nuestra actividad política, tanto desde la oposición como desde las instituciones en las que tenemos responsabilidades de gobierno. Éstas son nuestras prioridades porque estamos convencidos de que éstas son las prioridades de España. Constituyen grandes retos, que exigen grandes acuerdos. Acuerdos entre el Gobierno y la oposición, entre los grupos políticos, entre las instituciones, singularmente las Comunidades Autónomas, entre sindicatos y empresarios, entre los diferentes ámbitos que articulan la sociedad española. El PSOE reitera una vez más su voluntad de trabajar para llegar a esos acuerdos.

PSOE